

Nadie se acuerda de Edgar Espejo

Hace cien años, las personas que vivían en países donde no habían nacido eran 33 millones. Para el año 2010, se calcula que ese número llegará a los 200 millones. La situación en Argentina.

En Argentina viven tres millones de personas nacidas en otros países. La mayor parte proviene de países limítrofes, fundamentalmente Bolivia (alrededor de un millón) y Paraguay. No hay estadísticas recientes y los últimos números oficiales no son muy confiables, ya que muchas personas han ingresado al país en forma ilegal, sin el menor registro, y además porque después de 2001 (fecha del último Censo Nacional), el peso argentino fue devaluado y la economía experimentó un fuerte crecimiento, razones que favorecieron la llegada constante de personas que se incorporaron al mercado de trabajo local.

En todo el mundo se levantan muros visibles e invisibles que buscan detener un tránsito que modifica tanto el país de origen como el de llegada en todas sus estructuras: políticas, económicas, sociales y culturales. Estos muros tienen huecos: la inmigración no se detiene; a veces, según el país, se controla con celo rabioso; en otros casos se favorece por necesidades del mercado laboral. Esta realidad ha dado nacimiento a una nueva forma de ciudadanía, con sus maneras actuales de pensar y de vivir.

Esteban Sabanes:

Nacido en Buenos Aires. Estudios de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. Periodista en la práctica

Abstract: Argentina. Edgar Espejo was a bolivian citizen who was picked up by two policemen in civilian clothes, they beat him, insulted him with xenophobic comments, shot him and threw him into the river — but he survived. A case ignored by the media which places before us the crude reality suffered by migrants.

El caso Edgar

Nora Dalmasso fue asesinada en un country, un barrio cerrado. Durante meses asistimos a la cobertura mediática constante, desde todos los ángulos, con las opiniones de parientes, amigos, vecinos, dudosos especialistas. Conocimos todas sus costumbres sexuales, sus itinerarios habituales dentro del barrio cerrado. Aún hoy, a un año de aquel asesinato, cualquier ciudadano argentino identifica su nombre, sabe de quién se está hablando. Algunos, más detallistas o más morbosos, quizás recuerden los nombres de su marido y de su jardinero.

Algo similar sucedió con “el caso García Belsunce”. Otra muerte en un barrio cerrado. Un asesinato en el corazón de la aristocracia de Buenos Aires. La cobertura de los medios de comunicación fue abrumadora. Durante días enteros sólo se hablaba de “cómo murió María Marta”. El juicio al principal sospechoso, su marido, fue seguido por los canales de televisión dándole una relevancia similar a la que tienen los más importantes eventos políticos.

Edgar Espejo Parisaca, ciudadano boliviano, fue detenido en Buenos Aires el 12 de marzo de 2006 por dos policías de civil que conducían un auto particular. Fue golpeado, insultado haciendo hincapié en su nacionalidad y en su color de piel. Para ser claro: le dijeron “boliviano, negro de mierda, te vamos a matar.” Luego lo tiraron al Riachuelo y lo balearon. Resultó herido, pero sobrevivió.

Sólo algunos medios de comunicación escritos le dieron lugar —pequeño— a la “noticia”. En la televisión no se escuchó el nombre de Edgar. Ningún argentino reconocería ni su nombre ni su rostro. Nadie está al tanto de sus costumbres.

Una sociedad como la argentina, que siempre estuvo a mitad de camino entre su realidad latinoamericana y sus ambiciones europeas, expulsa de sus circuitos de información y de pensamiento a millones de personas.

El problema es profundo: los asesinatos de Nora Dalmasso y María Marta García Belsunce tuvieron, aparentemente, móviles pasionales o de dinero. Son casos gravísimos, terribles. Pero el análisis del “caso Edgar” implica mirar las estructuras de nuestra sociedad de una manera mucho más amplia, estudiar de qué manera llegan a nuestro país millones de personas, y de qué manera viven, quién los protege, si se sienten rechazados o no, si son explotados o no, si pueden confiar o no en los canales habituales de “legalidad”, de denuncia. El “caso Edgar” nos lleva a pensar las políticas de población y educativas, los derechos laborales y la distribución de la riqueza. Y cuando hay que mirar tan en profundidad, los medios de comunicación se agotan antes de empezar.

Resulta más interesante como noticia una historia de sexo y violencia en un barrio rico, que la realidad constante de discriminación y explotación de una inmensa cantidad de gente a la que no se quiere ver.

Made in Floresta

En el barrio de Floresta hay cientos de talleres textiles clandestinos. Las personas que trabajan en ellos son en su mayoría bolivianos. Y son esclavos. Duermen al lado de sus máquinas de coser. Amontonados comen y crían a sus hijos en un clima de opresión constante, amenazados.

Gustavo Vera es un argentino que desde el año 2001 ha llevado adelante, como coordinador de la Fundación Alameda (un Centro Comunitario que surgió de la Asamblea Barrial del 2001 de Parque Avellaneda), una importante tarea de asesoramiento a los obreros de los talleres y de denuncia de esa actividad.





“En Buenos Aires había, hace dos años, alrededor de cinco mil talleres clandestinos. Hoy quedan tres mil. Algunos se mudaron a la provincia, pero la realidad es que una gran cantidad fue desmantelada a partir de nuestras denuncias”, dice Vera.

“La realidad comienza a cambiar, pero el problema fundamental es que existen redes de trata de personas para el mercado textil mucho más grandes que los circuitos de prostitución. En la mayoría de los casos las personas llegan engañadas a Buenos Aires, con la promesa de un buen empleo, vivienda y comida, y se encuentran acá teniendo que trabajar esclavizados y sin conocimiento de sus derechos como trabajadores. Los derechos laborales en Argentina fueron el fruto de muchos años de lucha –continúa Vera–, y sin embargo hoy hay miles de personas en territorio argentino que viven por fuera de esas conquistas”.

“Esas redes de tráfico son parte de un sistema clandestino de producción”; Vera asegura que “se erradicó en estos últimos tiempos un mito muy fuerte: la idea de que en esos talleres se produce ropa de mala calidad, ropa trucha, para la venta en las ferias informales como La Salada. Hoy en día todo el mundo sabe que las grandes marcas de ropa, primeras marcas de ropa deportiva y tiendas que venden sus prendas en los shoppings más refinados, utilizan mano de obra esclava. Una campera que cuesta \$ 400 fue confeccionada por un obrero que recibió por ella un pago de \$ 2. Calculamos que estos talleres aún emplean alrededor de 500.000 personas, y este no es un dato que desconozcan las autoridades. Lo que sucede es que es un sistema que funciona, ganancias siderales para las empresas que utilizan circuitos de corrupción que son muy difíciles de desarticular”.

Fuentes del Consulado Boliviano en Buenos Aires confirman la realidad de desamparo en la que se encuentran muchos ciudadanos bolivianos en nuestro país. En muchos casos estas personas no son atendidas por la Policía cuando se acercan a presentar una denuncia. Si se presenta un funcionario del Consulado sí, recién ahí la denuncia es registrada. “Usted sabe cómo es esto”, dicen como excusa.

Patria Grande

La asunción de Evo Morales como Presidente de Bolivia trajo algunas mejoras a la situación de muchos bolivianos en Argentina. Se nombró un nuevo Consul (el funcionario anterior fue corrido de su cargo por considerar que estaba involucrado en circuitos de corrupción vinculados a los talleres clandestinos) y se trabajó para que en 2004 el Gobierno de Kirchner en

Argentina anunciara el Plan Patria Grande que facilita la radicación y documentación de los inmigrantes (los gobiernos constitucionales anteriores a 2003 habían mantenido la vigencia de la Ley de Migraciones del gobierno militar de Jorge Rafael Videla, de 1976).

Tanto el dirigente Gustavo Vera como el propio Consulado Boliviano reconocen que el Plan Patria Grande es un importante paso adelante: el inmigrante puede acceder en forma gratuita a una radicación “precaria” por 60 días, y comenzar así la tramitación de una radicación “temporaria”, que lo protege legalmente durante dos años. También este Plan significó una “amnistía” para la legalización de todo inmigrante llegado a la Argentina antes de abril de 2006.

El problema sigue siendo la enorme cantidad de gente que llega por fuera de esos carriles “normales”. Muchos llegan a Buenos Aires porque el hecho de tener un hospital gratuito y una escuela cerca ya constituye un importante avance frente a la realidad de extrema pobreza de una gran parte de la población en Bolivia. Pero se instalan en Buenos Aires sin conocer sus derechos más elementales y sin que nadie se preocupe por comunicárselos. Se instalan precariamente y traen consigo





costumbres, formas de relacionarse, modelos de familia, hasta idiomas (muchos pobladores de las zonas rurales hablan solo aymara o quichua) distintos a los de la gente que vive en la misma ciudad.

La gran ciudad no los recibe con los brazos abiertos. Solo hay empresarios que los esperan, que los necesitan como mano de obra barata y fomentan la inmigración. El resto de la sociedad prefiere no ver. El Gobierno de la Ciudad conoce todos estos datos, pero su intervención es nula. La Policía conoce cada ubicación de un taller clandestino, pero no actúa en consecuencia. Los medios de comunicación callan porque muchas veces tienen en sus pautas publicitarias avisos de las empresas que producen en esos talleres. Entonces la sociedad argentina es modificada por la vida de miles de personas que trabajan, consumen, gastan su dinero en esta ciudad; pero son miles a los que no se les presta atención. No están incluidos en el discurso de ningún partido político. En definitiva: se utiliza su fuerza, pero no se trabaja a ningún nivel de dirigencia para el mejor diálogo cultural; se aprovecha su habilidad en el taller, pero se los condena a una circulación temerosa por el resto de la ciudad, con el riesgo de ser detenidos o maltratados; se facilita su radicación pero se les suelta la mano para que se inserten en un mercado de trabajo no ya informal, sino que utiliza métodos delictivos.

En silencio

“En Europa se cierran las fronteras y al mismo tiempo se espera la llegada de mano de obra barata. Desde hace muchos años nos hemos dado cuenta de que el objetivo de las políticas que retóricamente tienden a legitimarse como políticas de cierre hermético de las fronteras no es la exclusión de los inmigrantes, sino más bien la previsión de mecanismos de integración selectiva, de inclusión selectiva, de inclusión —muchas veces— a través de la paradoja de la clandestinización”, dice el filósofo italiano Sandro Mezzadra.

Argentina tiene hoy una legislación que facilita la inmigración, a diferencia de países como España, Francia y los Estados Unidos, y muchos otros países que en los últimos

años han endurecido sus leyes migratorias. Sin embargo, la clandestinización es un proceso presente por igual en todos los países. Y junto con ella vienen la sospecha, la criminalización, la discriminación (incluso desde el lenguaje hace muchos años ya se utilizaron expresiones como “cabecitas negras” o “aluvión zoológico”, denominaciones peyorativas que identifican al migrante con el mundo animal), y fundamentalmente el desconocimiento, el análisis en bloque: “los problemas de los bolivianos que los arreglen dentro de su comunidad”, se escucha incluso en su propia boca, una sentencia que segrega, que supone que una parte de la población de nuestro país debe vivir fuera de una legislación común. Y estos dichos son funcionales a la clandestinización, a la continuidad de un circuito de producción rentable y oculto (se pasa por alto que muchas veces el dueño del taller también suele ser boliviano).

Sandro Mezzadra da un paso más en pos de la comprensión global de esta realidad: “la cuestión de la individualidad del migrante es polémica en varios sentidos. En primer lugar y políticamente, porque se trata de una polémica contra una manera de percibir la subjetividad de los migrantes bastante difundida: muchas veces se da por cierto que los migrantes tienen una identidad totalmente distinta a la nuestra, una identidad étnica. Y aún cuando a veces algunos suponen que es una identidad *mejor* —en la medida en que estaría más enraizada en un tejido comunitario— me parece que esa perspectiva reproduce un esquema típicamente colonial: acá los individuos, allá las comunidades; acá las naciones, allá las *etnias*; acá los ciudadanos, allá los súbditos. En el marco de ésta polémica yo enfatizo en la individualidad del migrante. Hablar del migrante como un sujeto que está totalmente subsumido en una identidad comunitaria cultural no tiene ningún sentido, ni científico ni político.” (en “*Derecho de Fuga - Migraciones, ciudadanía y globalización*”, Ediciones Tinta Limón, Buenos Aires, 2005).

El gran problema es el silencio. El silencio de los medios de comunicación, de la Policía, de los inspectores de los distintos gobiernos de la Ciudad. Y el silencio llega por conveniencia y porque hay miedo. Miedo al otro. El migrante teme perder lo poco que tiene, su vida. El argentino teme y segrega, teme y discrimina: la directora del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), María José Lubertino, declaró recientemente que “la xenofobia, especialmente hacia personas de países limítrofes y la discriminación cultural a los pobres” son las principales causas de discriminación registradas por ese organismo.

¿Cuál es el fin?

Si nadie conoce a Edgar Espejo no es casualidad: hay una construcción política y de sentido de una sociedad que no piensa la inclusión, que no quiere pensarla porque le molesta. Se puede extender un certificado, pero no se favorece en



la vida cotidiana el intercambio, ni siquiera la circulación por las mismas calles. **En las escuelas se sigue estudiando la inmigración del siglo XIX y del período de entreguerras. Nada se dice de los miles y miles que aún hoy llegan desde acá nomás.** Y todo esto da como resultado antes que nada el desconocimiento. Y prejuicios: lugares comunes del pensamiento medio, sentencias apresuradas, ausencia de diálogo. Se pierde una oportunidad de enriquecimiento social. Cuantos menos canales de contacto hay, más se favorece a aquél que quiere perpetuar sus conductas delictivas. Y así crece la idea de que el caso Edgar es sólo uno entre muchos casos similares.

Michel Foucault en su "Genealogía del Racismo", afirma que habría que invertir la famosa frase que asegura que la guerra es la continuación de la política con otros medios: "La inversión de la tesis de Clausewitz quiere decir que si es verdad que el poder político detiene la guerra y hace reinar una paz en la sociedad civil, no es para suspender los efectos de la guerra o para neutralizar el desequilibrio que se manifestó en la batalla final. El poder político tiene de hecho el papel de inscribir perpetuamente, a través de una especie de guerra silenciosa, la relación de fuerzas en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, hasta en los cuerpos de unos y otros.

